

CC 014A

SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA

El informe que sigue trata las situaciones más relevantes que en materia de violaciones a los derechos humanos se han presentado en la Argentina, en el período comprendido entre octubre de 1979 y setiembre de 1980.

La circunstancia más acuciante está dada por el hecho de que los gravísimos problemas sucedidos en años anteriores, se mantienen en toda su intensidad, sin que nada aliente a pensar que las autoridades estén dispuestas a llevar a cabo - en caso alguno - las investigaciones que corresponden. Ni siquiera, no obstante, los reclamos que se formulan desde distintos sectores de la comunidad, a suministrar información alguna sobre lo acaecido.

Esta comprobación ensombrece más aún el panorama a partir de la ocurrencia de nuevos hechos - en particular, desapariciones - que revelan la subsistencia, aunque en menor número de casos de métodos y procedimientos similares a los empleados en años anteriores, cuya reiteración solo resulta posible merced al ocultamiento de los mismos a la opinión pública.

A esto debe agregarse el mantenimiento de un conjunto de medidas que, de derecho y de hecho, implican graves restricciones al ejercicio de derechos individuales y colectivos.

Debe señalarse también una sucesión de episodios, los cuales, aún cuando pudieran atribuirse a la acción autónoma de determinados sectores operativos, no son objeto de ninguna investigación o esclarecimiento que llegue a conocimiento de la opinión.

Esta suma de circunstancias que afectan, no ya la vigencia del estado de derecho, sino a la existencia de estándares mínimos de seguridad, constituyen el más grave obstáculo que se interpone para la recuperación de formas de convivencia compatibles con normas institucionales.

Los hechos que a continuación se describen, con el agregado de breves comentarios, se hallan debidamente documentados, quedando esa documentación a disposición de quienes estén interesados en consultarla. Por lo demás, parte de ellos han sido objeto de noticias periodísticas.

C.E.L.S.- Centro de Estudios Legales y Sociales

OCTUBRE de 1980.

ARGENTINA PROJECT (S200000044)

U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS

Margaret P. Grafeld, Director

(☒) Release (☐) Excise (☐) Deny

Exemption(s):

Declassify: (☐) In Part (☐) In Full

(☐) Classify as ☐ Extend as ☐ Downgrade to ☐

Date  Declassify on  Reason

6/5-7

- Federación Argentina de Colegios de Abogados: Formuló entre otras, las siguientes peticiones: 1.-Derogación de la parte pertinente de la Ley 20.840 en cuanto se limita la libertad de información. 2.- Sometimiento a los jueces de la Constitución Nacional de todo detenido a disposición del P.E.N.. 3.- Decretar la libertad de quienes se encuentran bajo detención domiciliaria o libertad vigilada. 4.- Urgir el aceleramiento de los procesos judiciales originados en leyes de emergencia. 5.-Posibilitar que todo proceso sea asistido por un defensor de su confianza, bajo las garantías del debido proceso y el respeto a la noble misión del abogado. 6.- Acordar tratamiento adecuado a todo detenido, ejercitándose la más estricta vigilancia sobre ello. 7.- Dar respuesta a los casos de personas desaparecidas". ("Clarín", 30.5.80).

- Raúl Matera y otros dirigentes justicialistas: "Dar respuesta válida a los familiares de personas desaparecidas; necesidad de someter a los jueces a todo detenido a disposición del P.E.N.; decretar la libertad de los detenidos domiciliarios; asegurar los procesos judiciales originados en leyes de emergencia; asegurar el derecho a la defensa".

(Clarín, 20.8.80)

- José Antonio Allende y otros dirigentes populares cristianos: "Es necesario que los detenidos sean sometidos a sus jueces naturales; que se deje en libertad a todos aquellos que no tengan procesos pendientes y acelerar las causas en trámite, y deberán adoptarse los medios para aclarar la situación personal de los desaparecidos, de quienes sus familiares no tengan noticias de ningún género".

(La Prensa, 28.8.80)

- Arturo Frondizi: "Es preciso que el gobierno aclare la situación de los detenidos y desaparecidos de una manera que selle definitivamente las heridas que aún permanecen abiertas. Es preciso para ello dar a todos la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa, y a la vez dar satisfacción a la inquietud de los familiares de desaparecidos".

(Clarín, 24.9.80)

- Alberto Padilla: (miembro de la Academia Nacional de Derecho): "A esta altura de las cosas, lo que podría hacerse es dar la información que se tenga de los desaparecidos, como un paliativo para el sufrimiento de familias afectadas hoy por una incertidumbre tan afligente como la peor noticia".

("La Nación", 23.4.80)

- Conferencia Episcopal Argentina: "Como nos señalara el Santo Padre la incertidumbre angustiosa sobre los desaparecidos, la situación de los detenidos sin proceso, cuentan entre las causas profundas que impiden el mayor encuentro de los argentinos y que esperen sin demora alguna solución que nosotros como obispos, no solo aconsejamos, sino pedimos, y que, como verdad aún dolorosa, será siempre fuerza para la paz". (Julio 1980).

- Jorge Luis Borges: "Si hubo crímenes es necesario investigarlos. Es mi deber condenar, aunque mi juicio pueda parecer anacrónico. Los crímenes, ninguno los niega; 802 presos políticos sin defensores y el hecho de que en cierta manera clandestinamente, es algo que yo no acepto". ("Clarín", 1980).

- Diario La Nación: "El gobierno comienza a percibir que se está perfilando una tendencia según la cual, para dejar definitivamente atrás esa etapa del país- las derivaciones de la guerra - será necesario dar algún tipo de respuesta afirmativa al tema de los desaparecidos. En su última declaración, la Asamblea Plenaria del Epis-

1.2-Lista de detenidos/desaparecidos (desde enero hasta setiembre de 1980)

- 1.- ALBERTI Graciela, arg., arquitecta.  
el 17.3.80 secuestrada en la Capital Federal.  
Compañera de Ricardo Soria, secuestrado el mismo día. Denunciado por familiares.
- 2.- BENITEZ Angel Servando, arg., casado, L.E.8.256.948.  
el 20.3.80 fue secuestrado en la vía pública.  
A las 18 horas del mismo día, cuatro hombres armados se apersonaron en el domicilio de un familiar que vive al lado de la víctima, le obligaron a abrir la puerta de la casa de Benitez, entraron directamente a una de las habitaciones, llevándose una caja que había allí, sin revisar ninguna otra cosa.  
Habeas Corpus ante el Juzgado de Instrucción nº 13,: negativo.
- 3.- BENITEZ Jorge Oscar, 16 años, sobrino del anterior.  
Denunciado por familiares.
- 4.- CABILLA María Verónica, arg., 16 años, C.I.3.906599.
- 5.- CARBAJAL Angel, arg., 32 años, D.N.I.8.304.262.
- 6.- DE CORDOBA Luis, español, 58 años, casado profesor universitario.  
12.4.80 fue secuestrado en Santa Fé. La noticia apareció en los diarios.
- 7.- DE LA RUBIA Luis, secuestrado en su domicilio de Lomas de Zamora. Una hijita fue dejada a los vecinos.  
Denuncia de familiares.
- 8.- DE LA RUBIA Elsa. Esposa del anterior y secuestrada conjuntamente con él.
- 9.- DOLADO FARIA Luis Renato. Brasileño, 27 años, solt. est. de medicina.  
7.2.80 fue secuestrado en la vía pública en la Capital Federal. Había ido a despedir a unos amigos que partían en la empresa Pluna. La denuncia fue presentada en el Ministerio del Interior argentino y en la Cancillería y Presidencia de la República de Brasil.
- 10.- FERRE CARDOZO Ernesto Emilio, arg., 25 años, D.N.I.11.802.616.
- 11.- FRIAS ALBERGA Federico, 29 años, Denunciado por familiares.
- 12.- FUERICHS Miriam Antonia, suiza, 24 años, Pasaporte suizo nº:80-4229-1.
- 13.- GARCIA PEREZ Angel Horacio, arg., 28 años, L.E.8.539.262.
- 14.- GUADIX Gervasio Martín, arg., solt., 26 años. D.N.I.10.985.326.  
26.8.80 salió de su domicilio de Cap.Fed. y no volvió. A las 7 hs. del día siguiente, un grupo de hombres armados allanó su casa y detuvo a su compañera, Edith Aixa Bonna Estevez junto con la hijita de ambos, de 18 meses, que fue entregada posteriormente a los familiares.  
Habeas Corpus en el Juzgado Federal nº20 de La Plata:negativo.

25.- JAURETCHE

Osvaldo, periodista y fotógrafo, de 36 años, casado. Sus familiares han denunciado en el diario "Clarín" del 10 de octubre de 1980 que fue detenido cuando dejó a sus hijos en la escuela donde concurren habitualmente. Es sobrino del extinto escritor y político Arturo Jauretche. Desde su detención no se tiene noticia de su paradero. El domicilio de Jauretche fue revisado y sacudado.

Tal como surge de la lista de los casos que anteceden, la visita de la C.I.D.H. no interrumpió al proceso de desapariciones, ya que las mismas continuaron ocurriendo, tanto durante dicha visita - el número de casos registrados en setiembre de 1979 asciende a 13 - como en los tres últimos meses de ese año.

Iniciado el año 1980, se alentó la esperanza de que el empleo de este sistema hubiere quedado eliminado. No obstante, a partir del mes de marzo, comenzaron a llegar noticias de algunos casos de secuestros. Se pensó que podría tratarse de situaciones aisladas, pero desde mediados del año, las informaciones se fueron sumando hasta llegar a 25 detenciones-desapariciones operadas dentro del territorio de nuestro país. Agregando los 13 casos correspondientes al último trimestre del año 1979, el número de desaparecidos en los últimos 12 meses, asciende a 38 y los diversos elementos de que se dispone permiten concluir que lamentablemente el número total excede al registrado.

De acuerdo con la información que se posee, las detenciones se han producido, en casi todos los supuestos, luego de haber salido los afectados de sus respectivos domicilios. Varios de ellos fueron allanados inmediatamente después de ocurrido el secuestro, a veces de modo ostensible.

En la mayoría de estos casos no se ha presentado recursos de habeas-corpus, en muchos de ellos, no se ha hecho la denuncia ante las entidades locales de defensa de los derechos humanos. En no pocas situaciones, la denuncia ha sido presentada varios meses después de ocurrido el secuestro.

Estas reticencias obedecen fundamentalmente al temor que tales trámites crean en los familiares, en torno a su seguridad propia y a la de los desaparecidos, en especial en los casos en que los afectados fueron detenidos poco después de su reingreso al país. Por otra parte la falta de confianza en los resultados que pueda traer la interposición de los recursos de habeas-corpus es total, lo cual fue ratificado ante el rechazo, igual que en etapas anteriores, de aquellos que fueron interpuestos.

Las referidas desapariciones no han trascendido a la opinión pública. Los diarios solo las mencionan ocasionalmente y las referencias a estos nuevos hechos contenidas en algunas declaraciones emitidas por las entidades defensoras de los derechos humanos, han sido expresamente omitidas de los comunicados publicados por la prensa, salvo casos que tuvieron resonancia internacional. Por otra parte, en virtud de las razones señaladas más arriba, la información completa de que ahora se dispone, solo recientemente ha sido trasladada a la opinión mas especializada.

En el caso en que fue posible acceder al contacto con autoridades militares, se pudo advertir que el riesgo de que los afectados estuvieran sin vida fue insinuado por las mismas de modo más expreso que en etapas anteriores.

Dado que en ninguno de los casos se ha tenido noticia alguna acerca de los desaparecidos, cabe plantearse graves interrogantes en torno de su destino.

### 3.- Muertes

1.- MENTABERRY Román Javier, arg., 30 años, solt., periodista. El 29.11.79 fue hallado sin vida, en la oficina d donde funciona la redacción del periódico INFORME, su lugar de trabajo. Había sido ahorcado, y estaba manietado y amordazado. Con anterioridad, había sido víctima de reiteradas amenazas. La causa está radicada en el Juzgado Nacional de lra. Instancia en lo Criminal de Instrucción, Dr. Ricardo Reto, secretaría 136 del Dr. Raúl Ples. Hasta el momento se desconoce el estado de las actuaciones.

2.- MILER Francisco, arg., soltero, 29 años, D.I.4.934.620, inspector de tránsito en Lomas de Zamora. El 22.5.80 a las 5 hs. fue secuestrado al salir de su domicilio, en la localidad bonaerense de Sanfield. Se dirigía a su trabajo en Lomas de Zamora, acompañado por su hermano. Este también fué secuestrado, pero liberado el mismo día. Pudo observar algunas características del grupo actuante. El cadáver de Miler fue encontrado por la policía al día siguiente apoyado contra una pared, en la localidad de San Isidro, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, mientras que Sanfield lo está al sur. El resultado de la primera autopsia señalaba "muerte natural", pero una segunda ordenada por el Juez permitió dictaminar "muerte dudosa". Los procedimientos seguidos no han permitido reconocer las circunstancias en que se produjo su muerte. No hay ninguna persona imputada ni procesada.

### 4.- Desapariciones temporarias

1.- SANZ Jorge, arg, 25 años, estudiante de arquitectura. En enero de 1979 fue detenido por la Policía Federal mientras vendía bonos para la campaña contra el cierre de la Universidad de Luján. Al advertir los agentes la presencia de esos bonos lo transfirió al Servicio de Informaciones de la Fuerza Armada, cuyos agentes lo mantuvieron encapuchado y lo torturaron durante 30 horas. Luego fue abandonado en la vía pública por sus captores, y encontrado en el mismo momento por un patrullero de la Comisaría 33 que lo internó en la Guardia del Hospital Pirovano para ser atendido por las consecuencias de las torturas recibidas, y lo detuvo, instruyéndole sumario por violación de la Ley que prohíbe las actividades políticas. Posteriormente fue sobreesido por el Juez Federal Marcuadt, quien se negó a investigar las torturas y el secuestro.

2.- LAMBERTO Fernando Adrián, arg., soltero, estudiante, 22 años, C.I.7.800.286. El 30.5.80, a las 21 horas, fue detenido en su domicilio de la Capital Federal, por personas armadas,

Graciela FISCHER. Abogada. Detenida el 11.5.80. Destrozaron su oficina. La excarcelaron.  
 Rolando Rubén VALES. Detenido el 12 de mayo de 1980 en su domicilio a las 7 de la mañana por personal de la Policía Federal. Permaneció sin que se supiese su paradero hasta el 19. Le robaron objetos personales durante el allanamiento. Fue excarcelado.  
 Paula RIGGIO. Fue detenida entre el 7 y el 10 de mayo. Reconocida junto con los demás. Fue golpeada. Excarcelada.

- 5.- La prensa del Brasil informó de la desaparición de un ciudadano brasileño, Elbio de Freitas Flores, 30 años, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Rio Grande del Sur., junto con la de su novia, Gabriela Orden, de nacionalidad argentina. El secuestro se produjo el 26 de abril de 1980 en la provincia de Corrientes, Argentina. Ambos reaparecieron.
- 6.- El 7.7.80 fue secuestrado durante varias horas el dirigente sindical Roberto GARCIA, líder principal de la agrupación denominada "los 25 gremios", quien se caracteriza por su postura de oposición.
- 7.- BONA ESTEVEZ Edith Aixa, argentina, 24 años, una hijita de 18 meses. El 27.8.80 un grupo armado allanó su domicilio, secuestrándola junto con su hijita, quien fue devuelta a los pocos días a sus familiares. La joven Bona Estevez permaneció desaparecida durante una semana y fue remitida luego a la Comisaría de Villa Luzano, a disposición del Juez Federal. Su compañero, secuestrado el 26.8.80, permanece como detenido-desaparecido.

Es innecesario destacar los efectos que provoca la continuidad de un sistema de detenciones que revisten las formas de desapariciones temporarias, sumiendo a los afectados y a sus familiares en la más honda zozobra y generalizando el temor de que toda detención pueda eventualmente derivar en situaciones de este o aún más grave naturaleza.

#### 5.- Testimonios ofrecidos en el exterior.

Los testimonios de personas que recuperaron su libertad después de pasar períodos mas o menos largos en calidad de desaparecidos habrían permitido ya desde fines de 1976 reconstruir con algún detalle no sólo los procedimientos utilizados durante el operativo secuestro, sino también durante las etapas de interrogatorio y de cautiverio clandestino. Merced a estos relatos, se ha podido establecer la localización de varios centros clandestinos de detención - denominados chupadero - y en algunos casos individualizar con suficiente precisión la unidad castrense que estaba a cargo de los mistos.

En algunos casos estos testimonios pertenecen a exiliados (Rice, Liliana Andrés, Ana María Careaga, Rodríguez Larreta, etc). Otros en cambio fueron vertidos por personas que permanecen en Argentina y que fueron entrevistados por la CIDH en ocasión de su visita "in loco" (Bravo, Lapacó, Dedionigi, Glaton, etc.).

Pese a la utilidad brindada en su momento por esos relatos, las posibilidades de observación de sus autores estaban sin duda limitadas por las condiciones en que transcurría su cautiverio: ojos vendados o capucha, engrillados a la pared o encerrados en los llamados "tubos". Además en la mayoría de los casos, el tiempo de desaparición fue relativamente corto.

- Distintas unidades traen a detenidos a un mismo centro operativo; la información recibida es procesada en otro lugar, y da origen a nuevos operativos, a menudo en localizaciones distantes, bajo la responsabilidad de otras unidades; en algunas ocasiones llegan a esos centros detenidos capturados por otros sectores, ya sea en conja como pero ser sometidos a interrogatorios relacionados con investigaciones del propio centro o simplemente para recibir atención médica especial.

- En algunas situaciones especiales la presencia de un alto jefe denota que el trabajo en cada centro es objeto de supervisión.

Estos elementos y otros contenidos en los testimonios, podrían ser resumidos así:

a) Existencia de un sistema definido y estructurado, mediante el cual las fuerzas de seguridad en conjunto, y en cada una de sus áreas, por separado, llevan a cabo la acción represiva. Los elementos del sistema son básicamente uniformes, están articulados entre sí y presentan similitud regularizada en los enfoques de la acción e incluso en el uso de códigos y lenguaje.

b) Presencia de centros de detención clandestina, de carácter estable, integrados en parte por personal permanente, mientras que el otro es rotado con gran frecuencia. Los jefes de dichos centros, si bien gozan de un margen importante de autonomía operativa, están encuadrados dentro de un sistema cuyos resortes exceden ampliamente las atribuciones de los ejecutores directos.

c) Articulación de esos centros con las estructuras superiores de conducción, con apoyo orgánico para sus tareas.

#### 6.- Consideraciones sobre el problema de los desaparecidos y la negativa a brindar informaciones.

El problema relacionado con la situación de las personas desaparecidas, no ha experimentado variación alguna.

La autoridades han mantenido al respecto el más absoluto silencio, no obstante los reclamos formulados no sólo por los familiares afectados, las entidades que los representan y las instituciones de derechos humanos, sino también por diversos sectores de la opinión pública, según se señala en el ítem 13. Aún más, según se detalla en el ítem 6, los voceros oficiales han reiterado que estas y otras cuestiones similares no serán objeto de revisión, cerrando de tal modo la esperanza de que exista la intención de suministrar al menos una mínima información a las familias afectadas.

Nada se conoce acerca de investigaciones que se estén llevando a cabo. Hace aproximadamente tres meses, el Ministerio del Interior hizo conocer extraoficialmente que las familias debían concurrir nuevamente a suministrar los datos de cada caso y llegó a enviar comunicaciones escritas a los denunciantes que no alcanzaron a presentarse. Se repitió así un proceso idéntico al ocurrido en años anteriores, en cuanto a volver a requerir los datos habituales del denunciante y del desaparecido. Con el agregado esta vez del pedido de una fotocopia de habeas corpus presentado. Esta demanda motivó la pregunta de los sorprendidos familiares que han leído en diferentes recursos de habeas corpus las respuestas negativas del Ministerio del Interior: el organismo que informe no conoce o no registra la gestión de dicho Juez. Los empleados del Ministerio del Interior no proporcionan explicación alguna de los motivos que se persiguen con esta nueva indagatoria.

Lo que sí pudieron advertir los familiares que concurren, es que los interrogatorios trataban de avanzar en la obtención de informaciones acerca de las actividades, amistades, etc., de los afectados, lo cuál constituyó un motivo adicional de padecimientos para quienes volvieron a recurrir a este tipo de trámite sin que, en ningún caso, se les informara acerca de la investigación que se hubiera

cerrar la vía a cualquier esclarecimiento. Y esto, no sólo en relación a casos antiguos, sino también en los producidos en fechas recientes.

Por lo demás, el hecho de que las desapariciones se mantengan como método represivo en un número aún tan significativo de casos, constituye un factor negativo en orden a la posibilidad de obtener respuestas oficiales válidas con relación a los aspectos globales de este problema.

### 7.- Expresiones oficiales.

Una de las características del sistema de represión aplicado desde marzo de 1976 ha sido el hermetismo que guardaban al respecto los altos jefes militares. Las pocas referencias por parte del general Videla corresponden a entrevistas acordadas a órganos de prensa extranjeros o bien están incluidas en alguna conferencia de prensa cuyo tema oficial no fue ese.

La teoría sustentada en esos comentarios era: las desapariciones son producto de la campaña anti-argentina; muchos de los desaparecidos han pasado a la clandestinidad, dentro y fuera del país; otros fueron ajusticiados por sus propios compañeros; unos pocos quizás fueron víctimas de excesos en la represión.

El discurso del general Viola del 29/5/79 abre una nueva era, porque implica el reconocimiento de que hay "ausentes para siempre" como resultado de la "guerra victoriosa" conducida por las Fuerzas Armadas contra la subversión.

A partir de esa fecha y si bien en alguna declaración se volvió al punto de partida con versiones contradictorias, los voceros de las tres Armas reivindicaron explícitamente el derecho a no dar explicación alguna, pero partiendo de la aceptación de existencia de muertos, prisioneros y desaparecidos, como saldo "normal" de la "guerra sucia".

Las expresiones oficiales que con mayor crudeza se ha referido a la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y a su "modus operandi" durante la represión, son las siguientes:

"Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa de organismos paramilitares... Esta guerra la condujeron los generales, los militares y los brigadieres en cada fuerza... La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país, a través de los Estados Mayores". (Discurso del General Omar Riveros al dejar su cargo en la Junta Interamericana de Defensa, el 24/1/80).

La publicación de este discurso del general Riveros tuvo un trámite significativo, pronunciado en Washington en febrero de este año, llegó a los diarios locales a través de cables extranjeros a mediados de febrero, publicándose cortos resúmenes, que pasaron en general desapercibidos. El 28 de febrero el Comando en Jefe remitió a agencias y diarios locales el texto íntegro, con pedido de publicación. En "La Prensa" apareció la versión casi completa, y otros órganos volvieron a publicar resúmenes.

Debe entonces deducirse que medió un propósito expreso de transmitir a la opinión pública y eventualmente a todas las vertientes del poder, sin que quedaran dudas, la afirmación del general Riveros: "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, y a las órdenes..."

Algunos meses después, el general Viola asume públicamente la táctica que aparece como consecuencia de la afirmación de quien fuera su subordinado: "Condición fundamental de ello - consolidar un sistema institucional - es que las Fuerzas Armadas



- No hubo violación alguna de los derechos humanos, ya que en este tipo de guerra, queda suspendida toda norma, tanto jurídica como ética.

- La iniciativa de la guerra la tomó la subversión, por lo que debe recaer sobre ella la responsabilidad de lo sucedido.

-Un ejército victorioso no tiene por qué ofrecer explicación ni reparaciones.

-Hay un pacto con los héroes y mártires de las Fuerzas Armadas: en función de él, nada puede ser revisto; los resultados obtenidos deben mantenerse inalterables, cualquier rebrote, tanto ideológico como armado debe ser eliminado. No hay diferenciación sensible entre terrorismo, guerrilla, subversión, marxismo, ideologías contrarias al ser nacional o al modo de pensar occidental y cristiano, etc, fenómenos todos que deben merecer tratamiento similar.

Las referidas premisas son así planteadas como una cuestión prioritaria sobre otros problemas nacionales, revelando el apremio por cubrir y dejar al margen, la información y el examen que demanda la vigencia del estado de derecho.

#### 8.- Situación de los detenidos.

Información distorsionada.

La situación de los detenidos políticos, o detenidos por razones de seguridad, según la denominación oficial, ha mantenido básicamente sus características de años anteriores.

El número de detenidos es aún incierto. Las entidades de Derechos Humanos encuentran dificultades para completar y mantener actualizado su registro debido al variado número de unidades carcelarias, a su dispersión geográfica, al frecuente traslado de detenidos, y a la imposibilidad para muchos de sus familiares, (por razones económicas, laborales, de salud, de distancia, etc.), de formular o actualizar sus denuncias en las sedes de dichas organizaciones. Si se tiene en cuenta que un 25% de estos detenidos no reciben prácticamente visitas a lo largo del año, se podrá apreciar la dificultad que comporta mantener al día un registro de esta naturaleza.

Por su parte, las autoridades no suministran información, y cuando lo hacen, remarcan el carácter sólo aproximado de las cifras, y las categorías en que los califican son imprecisas y no coincidentes. Ya en su momento, estas distorsiones habían podido ser verificadas por la CIDH cuando, pocos días antes de la llegada de la misma a nuestro país, el general Harguindeguy informó oficialmente que el número de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, era de 1.526, de los cuales 807 estaban sin causa ni proceso ("El Día de La Plata. 23.8.79). La confrontación de estas cifras con la recogidas por la propia Comisión en cada uno de los Penales por ella visitados, no deja dudas sobre esta forma de manipular a la opinión pública.

Nada ha cambiado desde entonces. En recientes declaraciones el Ministro del Interior afirmó que hay en total 1.222 detenidos por razones de seguridad. Este total de personas detenidas sería la suma de 220 detenidos sin proceso, 400 con proceso, 400 con condenas y el resto ( o sea 202 personas detenidas) a disposición del Poder Ejecutivo Nacional ("Clarín" 20.8.80).

No se explica por lo tanto, en virtud de qué falta o situación hay 220 detenidos sin proceso. Tampoco se aclara, en los casos de condenas, o con proceso, si se trata de justicia federal o consejo de guerra. Además estas cifras son mucho mayores en los registros, aún incompletos, que posean las instituciones locales de defensa de los derechos humanos.

Publicación de listas.

Contrariamente a la norma aplicada desde principios de 1978

Este chantaje ocasiona un tremendo desgaste en los detenidos, y tiende a aumentar sus sentimientos de inseguridad y dependencia. En algunos penales se intentó con este mecanismo crear conflictos, incidiendo sobre la dinámica interna de los diversos reabellones, con el consiguiente deterioro de la salud mental de los reclusos. El intento apuntaba también a dividir a los familiares. Por último, estos fueron presionados no pocas veces por funcionario del Ministerio del Interior o personal militar, para que aconsejaron a sus detenidos que firmasen la delcaración que se les proponía, como un requisito para ser liberados.

#### Trato carcelario.

Tanto las normas que en teoría rigen el trato carcelario para detenidos por razones de seguridad u orden público, como las prácticas concretas impuestas en los diferentes Penales, configuran un régimen "cruel, inhumano y degradante". Ninguna mejora de fondo se ha verificado desde la fecha en que la CIDH formulara las observaciones posteriores a su visita "in loco". (Recomendaciones inc.8). Estos detenidos están sometidos a un sistema de absoluta excepción, basado en un concepto de seguridad carente de fundamentos racionales, y que se contradice con la evolución de los acontecimientos en el país. La ausencia de cualquier tipo de manifestación en los lugares de detención, y la absoluta inexistencia de intentos de fuga, quitan toda justificación al mantenimiento de dicho sistema.

#### El reglamento 929/80.

En mayo último fue sancionado el reglamento 929, que reemplaza al número 780/79, en vigencia desde abril 1979. La confrontación entre ambos permite comprobar que el más reciente retoma casi textualmente las disposiciones del anterior. La diferencia principal reside en que el 780/79 se refiere al conjunto de presos por razones políticas o criminales (procesados, condenados, o sin causa ni proceso), designándolo bajo el término "DT", abreviatura de "delincuente terrorista", mientras que esta calificación ha sido eliminada del nuevo Reglamento.

Se trata pues de una modificación puramente formal, que elementales principio jurídicos exigen. Pese a ello, dentro del Servicio Penitenciario no parece haber sido tomada en cuenta ni por el propio Director Nacional Coronel Antonio Dotti, según se desprende de sus delcaraciones en reciente conferencia de prensa ("Clarín", 26.7.80).

Un análisis detallado del Reglamento 929/80, pone de manifiesto la severidad de un régimen definitivamente más restrictivo en todos sus aspectos, - y no sólo en aquellos que podrían estar referidos a la seguridad - que el impuesto a presos comunes, cuya aplicación pone en peligro, por sí misma, la salud mental y física de esta categoría de detenidos. Cabe agregar que la redacción ambigua de algunos artículos permite interpretaciones que en la práctica desembocan en nuevas prohibiciones.

Tal es el caso, entre otros, del art. 20. Su inciso c) establece que el detenido puede "solicitar y recibir para su desarrollo cultural material educativo y de otra índole..." En la práctica, en la mayoría de los casos, no se autoriza la provisión de material bibliográfico de nivel terciario, ni siquiera sobre temas pertenecientes a la profesión o a la carrera universitaria cursada por el peticionante. En cuanto a los libros de formación general o de lectura recreativa, la censura aplicada a temas y autores reduce a su mínima expresión los beneficios teóricamente acordados en este inciso.

El inciso a) del mismo artículo establece la duración mínima de los recreos diarios (tres horas), que en algunos Penales corresponde

cruzar la pierna o cualquier otra actitud belada e insignificante, constituyen motivos suficientes para ser agredido, enviado a calabozo o injuriado. Esto crea en el detenido una permanente tensión y nerviosismo, cuya persistencia puede originar consecuencias imprevisibles".

La movilización llevada a cabo por varias entidades en torno del problema carcelario es la consecuencia de haberse llegado a una situación límite, cuyo indicador más dramático son los cinco suicidios ocurridos en Unidades penitenciarias masculinas en menos de 12 meses, y cuya cronología es la siguiente:

12.10.79: Edgardo Domingo GUERRA, detenido a disposición del PEN, desde 1976: se abrió las venas en su celda de la Unidad 6 de Rawson.

20.5.80: Miguel Angel VIVANCO, detenido a disposición del PEN,; se prendió fuego empapado en querosena, en su celda de la Unidad 9 de La Plata.

20.6.80: Rafael Francisco DE BENEDETTI condenado a 25 años de prisión por actividades subversivas: se abrió la arteria carótida en su celda de la Unidad 6 de Rawson.

10.7.80: Eduardo José SCHIAVONE detenido desde hacia tres años a disposición del Poder Ejecutivo: después de haber cumplido una condena de cuatro años de cárcel, se ahorcó en su celda de la Unidad 1 de la Capital Federal.

19.8.80: Raúl CONMINOTTO, detenido a disposición del PEN desde hacia cinco años: se ahorcó en la Unidad 9 de La Plata, al volver a su pabellón después de haber permanecido en celda de castigo.

El último caso mencionado ilustra trágicamente un procedimiento rutinario: los golpes indiscriminados que el personal aplica a los detenidos de sexo masculino. Si bien en general no son tan violentos como para dejar huellas físicas, el daño infligido por esta práctica en la personalidad de las víctimas, no podría ser mayor: cuando Raúl Conminotto volvió a su pabellón después de una sanción de casi treinta días, presentaba rastros innegables de castigos corporales, a los que había sido sometido en la celda de castigo. Pocas horas después, se suicidaba.

Casi en los mismos días, una denuncia por lesiones sufridas por el detenido Agüero mientras estaba en una celda de aislamiento presentada ante el Juzgado Penal nº 5 de la ciudad de La Plata. Las lesiones fueron acreditadas por los médicos forenses, pero no se tiene conocimiento de que el Director del Penal haya adoptado sanciones administrativas contra los responsables. Los detenidos del Pabellón correspondiente, que denunciaron estos hechos, fueron colectivamente sancionados con la prohibición de visitas y luego trasladados a la Unidad 1, de Capital Federal.

#### El Poder Judicial y los detenidos a disposición del PEN.

El Poder Judicial - con la excepción de algún fallo aún no firme - no ha variado hasta el presente su posición en torno a la situación de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. El examen de los fallos emitidos en los últimos meses para de manifestar que los jueces continúan considerando, cuando han transcurrido más de cuatro años y medio del inicio del actual proceso político que la mera expresión por parte del Gobierno de que un detenido ha mantenido alguna forma de "vinculación con actividades subversivas" o que "constituye un factor potencial de perturbación a la seguridad nacional", es motivo suficiente para rechazar los recursos interpuestos solicitando la liberación del detenido o renunciando alternativamente al ejercicio del derecho de opción a abandonar el país.

Desde numerosos sectores representativos de la comunidad se ha reclamado insistentemente que las personas que se encuentran bajo

ted el 9.6.79 por decreto del Ministerio del Interior. Detenido nuevamente por orden del Ejército (2º Cuerpo) el 27.6.79. Consejo de Guerra le da 10 años de condena.

CANTERO, Vicente: detenido el 18.10.77. Fue puesto en libertad el 17.6.79 por decreto del Ministerio del Interior. Detenido nuevamente el 28.6.79. Consejo de Guerra le da 8 años de condena. Acusación basada en tres escritos firmados por el detenido sin conocer su contenido (ojos vendados y apremios, sin pruebas ni testigos).

CAMPES, Jorge Eduardo: detenido el 17.6.76. Fue puesto en libertad el 17.6.79. Detenido nuevamente el 27.6.79. Consejo de Guerra le da 10 años de condena.

CHAVES, Ramón: detenido el 27.9.79. Fue puesto en libertad el 17.6.79. Detenido en Buenos Aires, llevado a Resistencia le hacen Consejo de Guerra. Lo condenan a 15 años.

FRANCO, Carlos Dante: detenido en noviembre de 1976. Puesto en libertad en junio de 1979, a los nueve días lo retienen nuevamente. Octubre de 1979 Consejo de Guerra lo condena a 9 años.

GOYA, Juan Carlos: detenido el 5.7.76. Puesto en libertad el 10.6.79. Detenido nuevamente el 27.6.79. Consejo de Guerra

ILDE, Ricardo Fortunato: detenido el 15.6.76. Puesto en libertad el 17.6.79. El 27.6.79 fue detenido nuevamente. Consejo de Guerra le da 22 años. Se anula la sentencia en setiembre del 79. Nuevo Consejo de Guerra lo condena a 24 años.

MIVEYRO, José: detenido el 3.11.76. Puesto en libertad el 17.6.79. Detenido nuevamente el 2.7.79. Consejo de Guerra lo condena a 22 años.

ZARATE, Antonio Eduardo: detenido el 3.11.76. Puesto en libertad el 30.6.79. Lo retienen nuevamente el 2.7.79. Consejo de Guerra lo condena a 10 años.

#### Detenidos bajo el acto institucional nº 2.

La mayoría de las personas cuya privación de libertad se dispuso bajo las previsiones del acto reforado, continúa bajo detención, en algunos casos en la forma de arresto domiciliario o libertad vigilada.

En determinadas situaciones se siguen también contra los afectados procesos ante la justicia ordinaria, los cuales se remoran inexplicablemente.

Como en las demás situaciones que se han tratado, la opinión pública carece de información acerca de las razones que motivan la continuidad de estas detenciones y de la existencia o no de resolución de las autoridades en virtud de las cuales pueden haberse aplicado expresamente penas de prisión.

#### ASILADOS

Prosigue sin solución el problema de los asilados, respecto de los cuales las autoridades continúan negando el otorgamiento de los salvoconductos previsto por la doctrina internacional.

Después de sendos allanamientos en los domicilios de las personas mencionadas, donde se requisó cartas personales y libros, todos de curso legal en el país, las detenidas fueron alojadas en el Departamento de Policía. Tuvieron que dormir la primera noche en el piso de cemento de la celda, y recién al segundo día se permitió a los familiares que les llevaran comida, ropa y elementos de limpieza.

El 1.2.80, al sr. Albino Pérez, cuñado de una de las detenidas y co-presidente de la LMDH, fue detenido al llevarle comida a su familiar.

Posteriormente la sra. de Pérez es liberada y se levanta la incomunicación de los dos detenidos, y la clausura del local.

El 3.3.80 fue nuevamente clausurado el local por orden del Juzgado Federal interviniente, el que dictó orden de captura contra otros dos dirigentes de la LMDH.

No obstante los numerosos reclamos presentados, las detenciones señaladas se han mantenido y en fecha reciente el Juez Federal que entiende en la causa instruida ha decretado prisión preventiva a los detenidos.

Debe agregar que pocos días antes de producirse el episodio que dio origen a la situación explicada, las autoridades de la Liga de Mendoza habían denunciado ante las autoridades el intento de colocación de material explosivo delante de su sede.

Es preciso agregar que en las últimas semanas dirigentes de las filiales de Mendoza de la A.P.D.H. y del M.E.D.H. recibieron visitas de miembros de las fuerzas de seguridad con evidentes propósitos intimidatorios.

A estos sucesos hay que agregar la suma de pronunciamientos de distintas autoridades militares - así como una continua campaña desarrollada a través de medios radiales y televisivos - profiriendo ataques de distinto orden a las entidades defensoras de los derechos humanos.

#### 10.- Violaciones al derecho de información y difusión.

En el mes de diciembre de 1979 abandonó el país en compañía de su familia, el conocido periodista, director del diario "Buenos Aires Herald", Robert Cox. El sr. Cox alcanzó particular notoriedad por dirigir la única publicación argentina que informó exhaustivamente sobre todas las violaciones a los derechos humanos.

Su partida se debió a una campaña de amenazas de toda índole que comenzó a ejercerse en forma sistemática a principios del mes de noviembre de 1979. Consistió en llamados telefónicos al diario y a su domicilio, presencia de personas extrañas en las inmediaciones de su casa y de la de otros familiares, preguntas que se formulaban a porteros y personal de servicio, etc. Dicha acción culminó con una extraña carta dirigida el 20 de noviembre a uno de sus hijos. Cox manifestó su preocupación a distintas autoridades y recibió garantías de que su seguridad sería guardada, pero al mismo tiempo advirtió que no se concretaba medida alguna de protección y que el personal de seguridad que en ocasiones parecía protegerlo durante algunos días, dejaba de concurrir luego, sin que mediara explicación alguna.

Estos hechos fueron expuestos en varios comunicados del Buenos Aires Herald y en particular en la nota aparecida el 7 de diciembre de 1979.

Robert Cox optó por alejarse de nuestro país.

ADEPA, la entidad que agrupa a los medios periodísticos argentinos publicó un comunicado el 17.12.79 señalando que no dudaba que las fuerzas Armadas hallarían a los culpables de estos hechos. No obstante, ninguna información se conoció al respecto.

En el mes de julio de 1980, ADEPA volvió a efectuar un reclamo, pidiendo esta vez por la seguridad del sr. James Neilson, nuevo director del diario "Buenos Aires Herald".

rios rotan semana a semana en los programas y muchas veces, ojos medianamente expertos, pueden advertir reportajes con preguntas y respuestas "armadas". Eso cierra toda posibilidad de esclarecimiento profundo de los hechos y con sus normas secretas, explícitas o implícitas, inhibe y asfixia las posibilidades del periodismo.

Finalmente el PEN Club, en una declaración entregada a la prensa en Londres el 1 de octubre de 1980 (publicada en "La Prensa" de Buenos Aires el 2.10.80) hizo saber que la Argentina se encuentra en 1980 entre los tres peores países del mundo para poder trabajar como escritor o periodista (los otros dos son, a juicio de dicha entidad, la Unión Soviética y Vietnam). Dicha institución afirmó tener informes de que después de diez años de lucha interna, 70 escritores y periodistas argentinos han desaparecido sin dejar rastros y se estima que unos 30 están encarcelados. El PEN Club agrupa a poetas, dramaturgos, periodistas, ensayistas y novelistas de todo el mundo, fue fundada en Londres en 1921 y tiene filiales en 70 países.

#### 11.- Contralor ideológico y adoctrinamiento educativo.

##### Prohibición de libros.

Según información del diario "La Nación" del 5 octubre de 1980, por decreto número 2038/80, el Poder Ejecutivo Nacional prohibió la "distribución, venta y circulación en todo el país de los tomos 2 y 9 de la Enciclopedia Salvat, del Diccionario Universites y de la Gran Enciclopedia del Saber, todos editados en España, por Salvat Editores, Sociedad Anónima. "Su difusión - sostiene el PE en los considerandos del decreto -, contribuye a mantener o expandir las condiciones que dieron lugar a la declaración del estado de sitio". Previamente, el 28 de julio de 1980 (ver "Clarín" del 29.7.80) el Ministro de Cultura y Educación había prohibido el uso de la obra Universites Gran Enciclopedia del Saber, editada por Salvat Editores S.A. en España, en todos los establecimientos dependientes del mismo, excluyendola de las bibliotecas escolares". El mismo ministerio excluyó la obra "El Principito" de Saint Exupery y las poesías de Pablo Neruda de las escuelas, aunque luego ante la protesta generalizada sostuvo que no era exacto. El ministro explicó que había regalado en una oportunidad un ejemplar de "El Principito" a su esposa y que le gustaban algunas poesías de Neruda, aunque no otras...

La Secretaría de Comunicaciones ha prohibido en el curso del lapso antes señalado la circulación postal de numerosos libros, muchos de ellos de carácter científico o universalmente reconocidos. Aunque esta prohibición sólo excluye, aparentemente, la distribución por medio del correo, en la práctica significa un alerta para editores, distribuidores y libreros para no venderlos, además de una tácita indicación de que no pueden usarse en escuelas y universidades. Entre ellos cabe citar los siguientes: revista "Vuelta" dirigida por el poeta mexicano Octavio Paz; "Los ignos" de Juan Carlos Arbuco, Latina SUD Editores, Buenos Aires 1973; "Electrouk Around the World", editado por Esselte Map Service, Estocolmo 1979; "Amerique du Sud- América del Sud-Sudamérica-South America" editado por Halweg Verlag, Berne y Stuttgart; "Imperialismo y clases sociales en el Caribe" de Mercedes Acosta, Andrés Corten, Isis Duarte y Carlos María Vilas, editorial Cuenca, Buenos Aires; "Letras del Continente mestizo" de Mario Benedetti, editorial Arca, Montevideo; "Occidente y Tercer Mundo" de Victorio Lanternari, editorial Siglo XXI, Argentina; "Misión abierta al servicio de la fe - Nuevas comunidades cristianas, ¿Hacia una nueva iglesia que nace del pueblo?, revista 1 de varios autores, editorial gráfica Letra, de Madrid; "Juventud explotada, juventud perdida" de Len Thanh Khoi, editorial Puf, de Paris; "Dura oficina el del exilio" de Nazim Hikmet, editorial Reguera Gómez; "Wilhelm Reich", editorial Granica,

señala pautas muy genéricas de orientación que, de no ser cumplidas según la interpretación de los órganos administrativos que crea la ley, trae como consecuencia la pérdida de las licencias por parte de los concesionarios (arts. 10 y 14). Prohíbe a las emisoras oficiales transmitir programas de los partidos políticos (art. 21). El órgano de aplicación de la ley, El Comité Federal de Radiodifusión - COMFER- está integrado por siete miembros, tres de los cuales representan a las Fuerzas Armadas.

#### Sistema educativo.

El sistema educativo argentino sigue sufriendo graves limitaciones que, en última instancia, constituyen graves restricciones a varios de los derechos incluidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: reducción del presupuesto que, en términos relativos, es el menor de los últimos cincuenta años; disminución de las cuotas de ingreso a las universidades estatales y clausura de la Universidad Nacional de Luján, sin justificación valdadera; aumento de la deserción escolar en todos los niveles y menor acceso a la enseñanza secundaria y técnica, por el deterioro del nivel de vida, la erradicación de las villas de emergencia y las restricciones pedagógicas de toda índole.

El periodista Eduardo Galeano ha denunciado, en el Suplemento de cultura del diario "Clarín" del 2 de octubre de 1980 que: "maestros de escuela, en una provincia del nordeste argentino, revelaron haber recibido orden de impartir enseñanza mínima, para tratar de que permanezcan más jóvenes como peones y no aspiren a mejores destinos en la ciudad".

El mismo periodista señala que el presupuesto universitario ha sido reducido en un 30 por ciento y que en los últimos cuatro años 200 músicos de orquestas sinfónicas o de concierto han emigrado del país.

Pero lo más grave está dado por los intentos de contralor y adoctrinamiento ideológicos, realizado en forma muchas veces hipócrita, pero insistente. Veamos algunas situaciones agudas:

- En todo el país se han impartido órdenes para la realización de clases, concursos etc. sobre temas vinculados con "la autoridad", las Fuerzas Armadas y temas afines. Los trabajos de los alumnos son enviados a la sede central del Ministerio de Cultura y Educación con el propósito, se afirma, de otorgar premios a los mejores. En realidad, los servicios de información procuran detectar a través de ellos futuros enemigos del régimen.

- La Dirección Nacional de Enseñanza Media del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación ha dictado en 1979 un reglamento de disciplina para los establecimientos secundarios que impone permanentemente, para los alumnos varones, el uso de camisa, corbata y saco. Prohíbe a estos usar barba. Prohíbe igualmente, para ambos sexos, el uso de pantalones tipo vaquero. Los alumnos deberán abstenerse de efectuar presentaciones o solicitudes colectivas; deben solicitar autorización del director del establecimiento para difundir cualquier impreso; ponerse de pie cada vez que ingrese o salga del aula alguna autoridad, profesor o persona mayor (circular 137/79). Las normas transcritas evidencian la ideología impresa a la educación: autoritarismo e inadecuación para formar ciudadanos de una democracia por falta de ejercicio de ésta.

- El ministro de Cultura y Educación doctor Jona Rafael Llerena Amadeo ha creado una llamada Comisión Orientadora de los Medios Educativos. (Resolución 286 del 15 de julio de 1980). La función más importante de esa Comisión consiste en proponer al ministro textos y materiales didácticos que, previa resolución de éste, serán de "uso recomendado".

Respecto a lo transcrito vale la pena copiar lo dicho por el dis-

### Testigos de Jehová.

El 24.8.80 en la localidad de Roldán, próxima a la ciudad de Rosario, fueron detenidas ciento cincuenta personas, miembros del grupo religioso Testigos de Jehová, incluyendo algunos menores. Los detenidos se encontraban participando del servicio religioso que habitualmente tienen los días domingo. En los días siguientes fueron liberados todos los detenidos, a los que se les instruyó sumario.

--El hecho fué difundido por la Agencia Noticias Argentinas, pero en la Capital Federal el único órgano que dió información al respecto, fue el "Buenos Aires Herald" en su edición 28.8.80.

Periódicamente se suscitan dificultades para alumnos de las escuelas que se abstienen de participar en actos que implican rendir homenaje a los símbolos patrios. A principio de setiembre fue expulsada de la escuela secundaria una joven que había pedido autorización para no izar la bandera, cuando fue designada para ello, en virtud de ser el mejor promedio de su división. La medida de expulsión fué agravada por la negativa, de parte de las autoridades del establecimiento, a extenderle la documentación que le permitiera, dado lo avanzado del año, inscribirse en otro establecimiento. Los diarios informaron sobre un telegrama de los padres exigiendo la entrega de esa documentación, pero no se ha conocido públicamente el desenlace del caso.

La sala A de la Cámara Civil de la Capital Federal, en fallo del 20.2.80, resolvió retirar la tenencia de dos hijos menores a su madre, por pertenecer ésta a la secta Testigos de Jehová, y la concedió al padre de los niños, divorciado de la mujer, quien dice profesar la religión católica, apostólica romana.

### Atentados contra Instituciones Judías.

El 3.10.79 una poderosa bomba estalló en la puerta del Seminario Rabínico "Marcos Guertzenstein", en la Capital Federal, provocando cuantiosos daños en las instalaciones. En razón de que los alumnos gozaban de unos días de asueto luego de la celebración del "Yom Kipur", no se produjeron víctimas fatales.

La D.A.I.A. emitió un comunicado de repudio.

Durante el año en curso, en los meses de julio y agosto, se produjeron tres atentados con explosivos en otras tantas escuelas judías, los que felizmente no ocasionaron víctimas, pero sí importantes daños materiales.

Con fecha 13.8.80, la D.A.I.A. emitió un comunicado de repudio y solicitó audiencia con el ministro del Interior, la que fue concedida el 27 del mismo mes. El General Harguindeguy prometió una rigurosa investigación sobre los hechos denunciados. Sus resultados no han sido dados a conocer.

### 13.- Tratamiento oficial del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (O.E.A.)

Adelantándose a la difusión en Washington del Informe de la C.I.D.H., prevista para el día 21 de abril pasado, el Gobierno citó a los representantes de los diarios y medios locales para el viernes 18 de abril, en las oficinas de la Secretaría de Prensa y Difusión, instaladas en la Casa de Gobierno. Un funcionario de la citada Secretaría les entregó una copia de las conclusiones del informe, pidiendo que se publicaran el día siguiente, o sea el 19.- Se requirió asimismo que además de las conclusiones, publicara el 20 de abril e in extenso la primer respuesta del Gobierno. Para ello se les entregó el documento el sábado 19 al mediodía. Y luego, nada más, la consigna era hacer olvidar a la opinión pública este tema. Días más tarde se proporcionó a los medios de comunicación y estos reprodujeron, también in extenso, la respuesta ampliada del Gobierno. A esta manipulación aludió el general Videla en